

Original

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
PROMOVIDA POR LOS DIPUTADOS
DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MÉXICO.

ESCRITO INICIAL DE DEMANDA,

H. PLENO DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN.

PRESENTE

Av. Pino Suárez 2, Colonia Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06065, Ciudad de México.

SECRETARÍA DE JUSTICIA
Y ENERGÍA

2012 OCT 28 PM 5:12

SECRETARÍA DE JUSTICIA
Y ENERGÍA

Quienes suscriben, **Maurilio Hernández González, Emiliano Aguirre Cruz, Daniel Andrés Sibaja González, Faustino de la Cruz Pérez, Yesica Yanet Rojas Hernández, Mónica Angélica Álvarez Nemer, Nazario Gutiérrez Martínez, Karina Labastida Sotelo, Elba Aldana Duarte, Alicia Mercado Moreno, Beatriz García Villegas, Max Agustín Correa Hernández, Isaac Martín Montoya Márquez, Lourdes Jezabel Delgado Flores, Gerardo Ulloa Pérez, Camilo Murillo Zavala, Azucena Cisneros Coss, Abraham Saroné Campos, Valentín González Bautista, María del Rosario Elizalde Vázquez, Mario Ariel Juárez Rodríguez, Edith Marisol Mercado Torres, Dionicio Jorge García Sánchez, Rosa María Zetina González, Luz Ma. Hernández Bermúdez, Anais Miriam Burgos Hernández y Adrián Manuel Galicia Salceda** en nuestro carácter de diputados del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de México, tal y como se acredita mediante copia certificada de las constancias de mayoría del Consejo Distrital No. 3 con cabecera en Chimalhuacán, Consejo Distrital No. 42 con cabecera en Ecatepec de Morelos, Consejo Distrital No. 21 con cabecera en Ecatepec de Morelos, Consejo Distrital No. 27 con cabecera en Valle de Chalco Solidaridad, Consejo Distrital No. 23 con cabecera en Texcoco de Mora, Consejo Distrital No. 6 con cabecera en Ecatepec de Morelos, Consejo Distrital No. 28 con cabecera en Amecameca de Juárez, Consejo Distrital No. 25 con cabecera en Cd. Nezahualcóyotl, Consejo Distrital No. 22 con cabecera en Ecatepec de Morelos, Consejo Distrital No. 8 con cabecera en Ecatepec de Morelos, Consejo Distrital No. 24 con cabecera en Cd.

Nezahualcóyotl, Consejo Distrital No. 39 con cabecera en Acolman de Nezahualcóyotl, Consejo Distrital No. 19 con cabecera Santa María Tultepec, Consejo Distrital No. 1 con cabecera en Chalco de Díaz Covarrubias, así como diez constancias de representación proporcional y validez de la elección para las diputaciones locales a nombre de Mónica Angélica Álvarez Nemer, Karina Labastida Sotelo, Alicia Mercado Moreno, Max Agustín Correa Hernández, Isaac Martín Montoya Márquez, Lourdes Jezabel Delgado Flores, Abraham Saroné Campos, Edith Marisol Mercado Torres, Dionicio Jorge García Sánchez, Luz Ma. Hernández Bermúdez, constantes de 24 copias certificadas por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México; asimismo, copia certificada de las constancias de mayoría del Consejo Distrital No. 11 con cabecera en Tultitlán de Mariano Escobedo, Consejo Distrital No. 40 con cabecera Ixtapaluca, Consejo Distrital No. 5 con cabecera en Chicoloapan de Juárez, constantes de 3 copias certificadas por la Diputada Ma. Trinidad Franco Arpero, Secretaria de la H. "LXI" Legislatura del Estado de México, mismas que se agregan al presente escrito como **ANEXO UNO**, señalando como representantes comunes en términos del artículo 62, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, la "Ley Reglamentaria") a los diputados **Azucena Cisneros Coss y Daniel Andrés Sibaja González**, con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ("CPEUM"), así como de los preceptos relativos y aplicables de la Ley Reglamentaria, comparecemos con respeto y elevada consideración ante este Tribunal Constitucional del Estado mexicano, para promover de manera oportuna y con legitimación suficiente, la **ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD** en contra del Decreto número 91 publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México el **30 de septiembre de 2022** respectivamente discutido, aprobado y promulgado por parte del **CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO** y el **PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO**, consistentes en la emisión de las siguientes porciones normativas:

- i) *Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 202, la fracción XVIII del artículo 390, el primer párrafo del artículo 407 y se adiciona el artículo 74 bis, la fracción XIX del artículo 390, la fracción IV del artículo 407 del Código Electoral del Estado de México.*

Lo anterior, al tenor de las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se exponen.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

CPEUM

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Decreto Impugnado

Decreto 91 por el que se reforma la fracción III del artículo 2020, la fracción XVIII del artículo 390, el primer párrafo del artículo 407 y se adiciona el artículo 74 bis, la fracción XIX del artículo 390, la fracción IV del artículo 407 del Código Electoral del Estado de México, publicado en la Gaceta del Estado el 30 de septiembre de 2022.

Ejecutivo Estatal

El Poder Ejecutivo del Estado de México.

Gaceta del Estado

Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México.

Ley Reglamentaria

Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

LGIPE

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

LGPP

Ley General de Partidos Políticos

SCJN

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Nota: Los resaltados y subrayados contenidos en las transcripciones y citas del presente escrito inicial son propios del actor, salvo que, expresamente, se indique lo contrario.

I. NOMBRES DE LOS PROMOVENTES Y DOMICILIO.

Maurilio Hernández González, Emiliano Aguirre Cruz, Daniel Andrés Sibaja González, Faustino de la Cruz Pérez, Yesica Yanet Rojas Hernández, Mónica Angélica Álvarez Nemer, Nazario Gutiérrez Martínez, Karina Labastida Sotelo, Elba Aldana Duarte, Alicia Mercado Moreno, Beatriz García Villegas, Max Agustín Correa Hernández, Isaac Martín Montoya Márquez, Lourdes Jezabel Delgado Flores, Gerardo Ulloa Pérez, Camilo Murillo Zavala, Azucena Cisneros Coss, Abraham Saroné Campos, Valentín González Bautista, María del Rosario Elizalde Vázquez, Mario Ariel Juárez Rodríguez, Edith Marisol Mercado Torres, Dionicio Jorge García Sánchez, Rosa María Zetina González, Luz Ma. Hernández Bermúdez, Anais Miriam Burgos Hernández y Adrián Manuel Galicia Salceda, en nuestro carácter de diputados correspondientes al 36% del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de México.

Se señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos relacionados con el presente el ubicado en [REDACTED]

Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria, se autorizan como delegados a los [REDACTED]

II. ÓRGANO LEGISLATIVO Y EJECUTIVO QUE EMITIERON LAS NORMAS IMPUGNADAS.

- i) El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de México.

ii) **El Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de México.**

III. NORMA GENERAL RECLAMADA Y MEDIO OFICIAL DE PUBLICACIÓN.

Se reclama el Decreto 91 por el que se reforma la fracción III del artículo 202, la fracción XVIII del artículo 390, el primer párrafo del artículo 407 y se adiciona el artículo 74 bis, la fracción XIX del artículo 390, la fracción IV del artículo 407 del Código Electoral del Estado de México, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México el 30 de septiembre de 2022.

Artículo 74 bis. *En el caso de coalición o candidatura común para postular personas candidatas a Gobernador o Gobernadora, los partidos que la integren podrán suscribir un Acuerdo específico en el que se establezca la forma en que éstos participarán en la integración de las dependencias del Ejecutivo y sus organismos auxiliares, así como en la definición de la agenda legislativa.*

El Acuerdo de Participación previsto en el párrafo anterior deberá ser suscrito por la persona candidata a Gobernadora o Gobernador y las personas dirigentes estatales de los partidos políticos que integran la candidatura, con la aprobación de sus respectivos órganos directivos estatales.

El Acuerdo deberá presentarse ante el Instituto para efectos de su inscripción, dentro de los plazos previstos para el registro de los convenios de coalición o de candidatura común, según se trate.

Artículo 202. ...

I. y II. ...

III. *Inscribir en el libro respectivo el registro de partidos, así como los convenios de coaliciones, fusión y los acuerdos de participación.*

IV. a X. ...

Artículo 390. ...

I. a XVII. ...

XVIII. Resolver las controversias derivadas del incumplimiento a los Acuerdos a que se refiere el artículo 74 bis de este Código, de conformidad con lo previsto en Libro Séptimo del mismo.

XIX. Las demás que le otorga este Código.

Artículo 407. Durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales sólo será procedente el recurso de apelación, que podrá ser interpuesto por:

I. a III. ...

IV. En cualquier momento, los partidos políticos en contra del incumplimiento del Acuerdo de Participación establecido en el artículo 74bis de este Código.

IV. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS Y DERECHOS HUMANOS VULNERADOS.

El Decreto Impugnado viola los principios rectores del proceso electoral de certeza, imparcialidad e independencia, en términos de los artículos 41, base V, párrafo primero, apartado A; artículo 116, párrafo primero y fracción IV, inciso b); el artículo 73, fracción XXIX-U, todos de la CPEUM, así como de los diversos artículos 87, 88, de la Ley General de Partidos Políticos.

VI. PROCEDENCIA.

Resulta plenamente procedente el presente medio de control constitucional, conforme a lo previsto en al CPEU como en su Ley Reglamentaria, tal como se acredita a continuación.

A. OPORTUNIDAD.

Las normas generales impugnadas fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de México el **30 de septiembre de 2022.**

En ese sentido, conforme al artículo 60 de la Ley Reglamentaria, la presente demanda se presenta dentro de los **treinta días naturales** siguientes a la publicación de las normas impugnadas, resultando procedente en cuanto a la oportunidad de su presentación.

B. LEGITIMACIÓN ACTIVA.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 105, fracción II, inciso d) y demás relativos de la Ley Reglamentaria, el 33% de los diputados de cualquier legislatura local podrá promover acción de inconstitucionalidad en contra de normas generales emitidas por la legislatura a la que pertenezcan.

En ese sentido, queda plenamente acreditada la legitimación activa en la presente demanda al ser suscrita por los legisladores necesarios y reunir el porcentaje establecido en el artículo constitucional referido, es decir, al menos el 33% correspondiente.

Ahora bien, el Decreto impugnado resulta contrario a los principios y preceptos de nuestra Constitución Federal y, por lo tanto, ese Alto Tribunal deberá declarar su invalidez constitucional, tal como se acredita a través de los siguientes.

VII. CONCEPTOS DE INVALIDEZ.

PRIMERO. – EL DECRETO IMPUGNADO VIOLA LA FRACCIÓN XXIX-U DEL ARTÍCULO 73, EN CONCORDANCIA CON EL 116, FRACCIÓN IV, INCISO A, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, AL PRETENDER EQUIPARAR MATERIALMENTE LAS CANDIDATURAS COMUNES CON LOS GOBIERNOS DE COALICIÓN.

En el presente concepto de invalidez se demostrará a sus Señorías la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, al tratar de equiparar materialmente las candidaturas comunes con el régimen jurídico aplicable a los gobiernos de coalición, siendo que dicho régimen se encuentra reservado para el Congreso de la Unión.

En ese sentido, debe distinguirse en primer lugar respecto de la figura de gobiernos de coalición, introducida al ordenamiento jurídico mexicano a través de la reforma constitucional en materia política-electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.

En dicha reforma, se contemplaron modificaciones respecto de seis ejes principales:

- a) Régimen de gobierno;
- b) Autoridades electorales;
- c) Régimen de partidos;
- d) Fiscalización y rebase de tope de gastos de campaña;
- e) Comunicación política;
- f) Instrumentos de participación ciudadana;

De dichos ejes, resultan de especial importancia en la presente demanda **las reformas al régimen de gobierno y de partidos políticos**, pues surge en primer lugar la figura de gobierno de coalición, que consiste en la facultad del Presidente de la República de optar por una alianza política en la que se establezca una agenda en común a partir de la firma de un convenio con los partidos políticos y aprobado por el Senado de la República.

Dicha figura, como bien se define, constituye un cambio en el régimen de gobierno previsto en la Constitución, pues implica la participación de distintas fuerzas políticas en la formación del gobierno a través de compromisos y la ratificación por parte de las cámaras del Congreso de la Unión de los secretarios de despacho que integran la administración pública federal.

En cuanto al régimen de los partidos políticos, la reforma constitucional plantea la creación de la Ley General de Partidos Políticos, de tal manera que se establezca un sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales federales y locales.

En ese sentido, introdujo las coaliciones flexibles, siendo aquéllas para postular el 25% de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local bajo una misma plataforma electoral y modificó la definición de coalición parcial como aquélla para postular al menos el 50% de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local bajo una misma plataforma.

De esa manera, en la Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 85, se estableció la definición de coalición, entendida como aquélla formada por diversos partidos políticos para postular los mismos candidatos en las elecciones, ya sea federales o locales, siempre y cuando se apeguen a lo establecido en la LGPP y la legislación local aplicable.

Es así que el artículo 87 de la LGPP establece los requisitos que deberán reunir las coaliciones que pretendan formar los partidos políticos, estableciendo en su

numeral segundo la posibilidad de los partidos nacionales y locales formar coaliciones para las elecciones de gobernador, diputados a las legislaturas locales de mayoría relativa y ayuntamientos, así como en su numeral séptimo se establece la obligación de los partidos que se coaliguen de celebrar y registrar el convenio correspondiente en los términos del capítulo correspondiente, como a continuación se observa:

Artículo 87.

(...)

2. Los partidos políticos nacionales y locales podrán formar coaliciones para las elecciones de Gobernador, diputados a las legislaturas locales de mayoría relativa y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa de mayoría relativa y los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

(...)

7. Los partidos políticos que se coaliguen para participar en las elecciones, deberán celebrar y registrar el convenio correspondiente en los términos del presente Capítulo.

(...)

Ahora, si bien tanto en la figura de los gobiernos de coalición como en la figura de las coaliciones de partidos políticos se establece como requisito la firma de un convenio en el que se establezcan los términos en los cuales se formará la coalición respectiva, es necesario distinguir la naturaleza de ambas figuras.

Por un lado, tenemos que la figura de gobierno de coalición corresponde a un régimen de gobierno que se aparta del modelo presidencialista común establecido en la Constitución, para establecer un régimen con elementos que se asemejan al *régimen de gobierno parlamentario*, de tal manera que el propio Congreso de la Unión cuente con participación en la formación de la administración pública y se propicie la celebración de acuerdos políticos para una agenda común de las fuerzas políticas que participen en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Por el otro lado, las coaliciones contempladas en la Ley General de Partidos Políticos corresponden a la materia electoral, al tratarse precisamente del derecho de los partidos políticos, tanto nacionales como locales, de formar alianzas con otros partidos para efecto de presentar una candidatura común a un cargo de elección popular.

En ese sentido, la reforma al Código Electoral del Estado de México prevé lo siguiente:

Artículo 74 bis. *En el caso de coalición o candidatura común para postular personas candidatas a Gobernador o Gobernadora, los partidos que la integren podrán suscribir un Acuerdo específico en el que se establezca la forma en que éstos participarán en la integración de las dependencias del Ejecutivo y sus organismos auxiliares, así como en la definición de la agenda legislativa.*

El Acuerdo de Participación previsto en el párrafo anterior deberá ser suscrito por la persona candidata a Gobernadora o Gobernador y las personas dirigentes estatales de los partidos políticos que integran la candidatura, con la aprobación de sus respectivos órganos directivos estatales.

El Acuerdo deberá presentarse ante el Instituto para efectos de su inscripción, dentro de los plazos previstos para el registro de los convenios de coalición o de candidatura común, según se trate.

Conforme al artículo 74 bis impugnado, en aquellos casos en los que los partidos políticos postulen personas candidatas a Gobernador o Gobernadora del Estado a través de una coalición o candidatura común, los partidos políticos podrán suscribir un Acuerdo específico en el que se establezca la forma en que los partidos participarán en la integración de las dependencias del Ejecutivo y sus organismos auxiliares, así como la definición de la agenda legislativa.

Dicho acuerdo deberá ser suscrito por la persona candidata a gobernador, así como por los dirigentes de los partidos políticos involucrados en la candidatura común.

De esa manera, el artículo impugnado pretende establecer un régimen jurídico similar al Gobierno de Coalición, al incidir directamente en la formación del gobierno del candidato a gobernado e **implicando necesariamente una modificación material al régimen de gobierno del Estado de México, resultando contrario a la propia Constitución del Estado de México y a la Constitución General.**

Así, es importante tomar en cuenta que el texto adicionado al Código Electoral **implica necesariamente involucrar a los partidos políticos en la conformación del gobierno**, pues son sus dirigentes y órganos de gobierno los que, en conjunto con la persona candidata, definirán previamente la manera en que los partidos

participarán en el nombramiento de los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal.

Esto incide directamente en la facultad del Congreso de la Unión contenida en la fracción XXIX-U del artículo 73 de la Constitución para emitir las leyes generales para distribuir competencias entre la federación y los estados en materia de partidos políticos, organismos electorales y procesos electorales, al establecer requisitos y condiciones para los convenios de coalición contrarios a la Ley General de Partidos Políticos.

Se confirma la violación constitucional al observar lo establecido en la fracción IV del artículo 116 de la Constitución, en la que se establecen los principios rectores en materia electoral que deberán observar los estados de la república y se establece la jerarquía de los cuerpos normativos que la componen, como se observa a continuación:

Artículo 116. – (...)

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:

Así, la propia Constitución establece una jerarquía mayor para las leyes generales en materia electoral respecto de las constituciones y leyes de los Estados en dicha materia, fortaleciendo la inconstitucionalidad de las normas impugnadas en la presente acción.

Adicionalmente, las modificaciones que fueron aprobadas mediante el Decreto que ahora se impugna, no solo son inconstitucionales por invadir y pretender normar una figura jurídica que escapa de la jerarquía de la Ley Electoral Local, sino que también desvirtúa por completo los fines y alcances de un Gobierno de Coalición, en los términos en que la propia Constitución General tiene previstos y reservados.

En primer término, vale la pena retomar que desde el propio texto constitucional¹ se establece que para la conformación de un Gobierno de Coalición –tratándose del Ejecutivo Federal–, se debe de contemplar la participación de los partidos políticos que cuenten con una representación en el Congreso de la Unión. Situación que, evidentemente, no se encuentra contemplada en la porción normativa que ahora se controvierte. Pues en el texto del artículo 74 bis, únicamente se contempla

¹ Artículo 89, fracción XVII de la CPEUM.

la participación de la persona candidata y de las fuerzas políticas que hayan participado de la coalición o de la postulación de la candidatura común.

Es decir, la Reforma materia de esta impugnación no garantiza que el Gobierno de Coalición que se pretende alcanzar con la firma del acuerdo respectivo, pueda ser conformado con fuerzas políticas integrantes del Congreso Estatal. Y en el otro extremo, también excluye la posibilidad de que fuerzas políticas ajenas al Convenio de Coalición Electoral puedan suscribir y participar de un Gobierno de Coalición, lo que atenta contra la pluralidad democrática que, en esencia, es uno de los fines que busca la conformación de Gobiernos de Coalición.

Es decir, que de modo paradójico podríamos encontrar en un escenario en el que un Gobierno de Coalición derivado de un Convenio de Coalición Electoral, cuente con la participación de un partido político que no tenga representación alguna en la legislatura estatal (considerando que las elecciones para el cargo de Gobernador y de Diputaciones Locales, no son uniformes); y, simultáneamente, que el Gobierno de Coalición esté integrado sin la representatividad que, de ordinario, podría corresponder a una fuerza política mayoritaria en el Congreso Local.

Vale la pena ilustrar dicha situación con un ejemplo sencillo:

- En el proceso electoral local 2021 del Estado de México, se llevó a cabo la renovación de las diputaciones integrantes de su Congreso local, que se integra con un total de 75 legisladores(as).
- Imagínese que en dicha elección hayan participado, sin ningún tipo de coalición, los partidos políticos "A", "B", "C", "D" y "E", todos de corte nacional.
- Imagínese que validados los resultados y hecho la distribución de curules correspondiente, la legislatura se hubiera integrado de la siguiente forma:
 - "A" cuenta con 40 diputaciones;
 - "B" cuenta con 15 diputaciones;
 - "C" cuenta con 10 diputaciones;
 - "D" cuenta con 10 diputaciones; y
 - "E" no obtuvo ningún triunfo ni le fue asignada diputación alguna.
- Ahora, en el próximo proceso electoral local 2023 del Estado de México, en el que solo se renovará su gubernatura, vuelven a contender los partidos antes mencionados. Solo que ahora sí se celebra un Convenio de Coalición Electoral, pero únicamente entre los partidos "B", "C" y "E", pues todos cuentan con la posibilidad de participar en dicha elección, derivado de su naturaleza como partidos políticos nacionales. En ese entendido, tenemos

partidos que conforman una coalición que en total solo cuentan con 25 diputaciones en el Congreso local.

- Derivado de dicho Convenio de Coalición Electoral, los partidos "B", "C", y "E", celebran además un Acuerdo en términos de lo previsto por el artículo 74 bis objeto de esta impugnación.
- De triunfar dicha coalición, se obtendría que el Estado de México contará con un Gobierno de Coalición:
 - Sin la participación de las fuerzas políticas legítimamente representadas en el Congreso local;
 - Con representación de una fuerza política que no está representada en el Congreso Estatal; y
 - Se integraría un Gobierno de Coalición que impide la participación de alguna otra fuerza política, dado que el Acuerdo del que deriva está indebidamente entremezclado con un Convenio de Coalición que, por su propia y especial naturaleza, dejará de tener efectos una vez que se validen los resultados electorales. Es decir, esta reforma estaría creando una figura jurídica que trasciende la propia vida, temporalidad y fin del Convenio de Coalición Electoral del que deriva.

Sobre este último punto, vale retomar que en términos del artículo 87, numeral 11, de la LGPP, los convenios de coalición terminarán de manera automática una vez que concluya la etapa de resultadas y se emitan las declaraciones de validez correspondientes. De manera tal que la Reforma que ahora se controvierte atenta contra la propia naturaleza de las coaliciones, al preverse que dentro de las mismas se pueda generar un acuerdo que busca, precisamente, trascender a su propia vigencia, temporalidad y finalidad.

Adicionalmente, no puede dejarse de llamar la atención que con la introducción de esta disposición se busca evadir la participación del Congreso Estatal en la conformación de un Gobierno de Coalición, dado que pretende sustraerlo a la gobernabilidad democrática de esta Entidad Federativa, para introducirla a las vicisitudes que derivan de la propia contienda electoral. Lo que, además, violenta lo dispuesto por el propio artículo 77, fracción XLVIII de nuestra Constitución local, que expresamente dispone:

Artículo 77.- *Son facultades y obligaciones de la Gobernadora o Gobernador del Estado:*

[...]

XLVIII. Optar en cualquier momento por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en la Legislatura del Estado.

*El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, **los cuales deberán ser aprobados por mayoría de las Diputadas y los Diputados presentes en la sesión del pleno de la Legislatura donde se discuta.** Si la Legislatura se encontrara en receso la Diputación Permanente convocará de inmediato a la Legislatura del Estado a un periodo extraordinario. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición.*

Es decir, que a partir de la disposición controvertida se busca defraudar al propio modelo Constitucional que ha tenido a bien darse el Estado Libre y Soberano de México, pues con él se pretende que derive un Gobierno de Coalición distinto al ya normado desde nuestra propio texto constitucional, intentado sustraer la participación que tiene reconocida la Legislatura Local para conocer y aprobar el Convenio y Programa con el que se busca integrar este régimen de gobierno Haciendo creer que para la existencia de un Gobierno de Coalición basta únicamente la voluntad de los partidos postulantes de una coalición electoral, así como de la persona que hayan decidido postular para el cargo de Gobernador o Gobernadora de la entidad.

Como se ha venido mencionando, este Órgano Revisor debe tener en cuenta que los Gobiernos de Coalición no solo buscan que más fuerzas políticas puedan participar de la gobernanza de un Estado, sino que dicha participación es solo un instrumento o herramienta para alcanzar objetivos aún mayores en beneficio de la gobernabilidad. Lo que explica que, de ordinario, prevén la conformación de una agenda legislativa que orientará las políticas públicas de dicho gobierno, así como las causas que puedan llevar a su disolución. Sin embargo, el tipo de acuerdo que ahora se prevé en el artículo 74 bis controvertido, deja de atender dicha finalidad e introduce un Gobierno de Coalición que se aleja de las bases constitucionales previstas en los artículos 76, fracción II y 89, fracción XVII de nuestra CPEUM, así como lo dispuesto por el diverso arábigo 77, fracción XLVIII de la Constitución Local, que actualmente orientan dicha figura jurídica en el modelo presidencial federal y régimen de gobierno local, respectivamente.

Es así como, al resultar contrarias a diversas disposiciones constitucionales, sus Señorías deberán declarar la invalidez constitucional del Decreto 91 por el que se reforman la fracción III del artículo 202, la fracción XVIII del artículo 390, el primer

párrafo del artículo 407 y se adiciona el artículo 74 bis, la fracción XIX del artículo 390, la fracción IV del artículo 407 del Código Electoral del Estado de México.

SEGUNDO. – EL DECRETO IMPUGNADO OTORGA AL TRIBUNAL ELECTORAL ESTATAL FACULTADES MÁS ALLÁ DE LA MATERIA ELECTORAL, AL TRADUCIRSE EN UNA CUESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

En el presente concepto de invalidez se demostrará a sus Señorías la inconstitucionalidad de las normas impugnadas al violar lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución General.

En primer lugar, es importante señalar que, como parte del sistema de justicia en materia electoral, la Constitución prevé la existencia de tribunales especializados para la resolución de asuntos relacionados con los partidos políticos, las personas candidatas a cargos de elección popular y los derechos político- electorales involucrados.

Esto tiene como objetivo asegurar la impartición de justicia de los ciudadanos y la protección de los derechos político- electorales de ellos.

Dichos tribunales se constituyen como la máxima autoridad jurisdiccional electoral, siendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la facultada para resolver en definitiva los juicios y recursos promovidos en contra de actos derivados de procesos electorales federales, así como en casos de excepción de procesos locales, y de manera análoga los tribunales electorales de los Estados de la República son los facultados para resolver los juicios y recursos promovidos en contra de actos derivados de los procesos electorales locales.

En ese sentido, el Decreto 91 impugnado establece la posibilidad de celebrar un acuerdo por parte de las coaliciones de los partidos políticos para presentar una candidatura común para Gobernador del Estado.

De esa manera, prevé la obligación implícita de los partidos políticos y la persona candidata en cuestión de apegarse a lo pactado en el acuerdo respecto de la forma en que los partidos participarán en el nombramiento de los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo estatal, al establecer un recurso jurisdiccional para impugnar los incumplimientos a dicho acuerdo, como se observa a continuación:

Artículo 74 bis. En el caso de coalición o candidatura común para postular personas candidatas a Gobernador o Gobernadora, los partidos que la integren podrán suscribir un Acuerdo específico en el que se establezca la forma en que éstos participarán en la integración de las dependencias del Ejecutivo y sus organismos auxiliares, así como en la definición de la agenda legislativa.

El Acuerdo de Participación previsto en el párrafo anterior deberá ser suscrito por la persona candidata a Gobernadora o Gobernador y las personas dirigentes estatales de los partidos políticos que integran la candidatura, con la aprobación de sus respectivos órganos directivos estatales.

El Acuerdo deberá presentarse ante el Instituto para efectos de su inscripción, dentro de los plazos previstos para el registro de los convenios de coalición o de candidatura común, según se trate.

Artículo 202. ...

I. y II. ...

III. Inscribir en el libro respectivo el registro de partidos, así como los convenios de coaliciones, fusión y los acuerdos de participación.

IV. a X. ...

Artículo 390. ...

I. a XVII. ...

XVIII. Resolver las controversias derivadas del incumplimiento a los Acuerdos a que se refiere el artículo 74 bis de este Código, de conformidad con lo previsto en Libro Séptimo del mismo.

XIX. Las demás que le otorga este Código.

Artículo 407. Durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales sólo será procedente el recurso de apelación, que podrá ser interpuesto por:

I. a III. ...

IV. En cualquier momento, los partidos políticos en contra del incumplimiento del Acuerdo de Participación establecido en el artículo 74bis de este Código.

De esa manera, la reforma al artículo 390 modifica la competencia del tribunal electoral estatal para ampliar sus facultades y permitir que resuelva las controversias derivadas del incumplimiento a los acuerdos a que se refiere el artículo 74 bis adicionado, en específico a través del recuso de apelación.

Dicho recurso de apelación obedece primordialmente a la defensa de los derechos político electorales fuera de un proceso electoral, de tal manera que su procedencia va de la mano con el derecho de asociación política y la impugnación de sanciones impuestas por el organismo público local electoral, como se observa a continuación del Código Electoral del Estado de México:

Artículo 407. Durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales sólo será procedente el recurso de apelación, que podrá ser interpuesto por:

I. Los partidos políticos, en contra de los actos, omisiones o resoluciones de los órganos centrales del Instituto o contra los actos u omisiones del Presidente del Consejo General o del Secretario Ejecutivo del Instituto.

II. Las organizaciones interesadas en constituirse en partido político local, en contra de la resolución que niegue su registro.

III. Las personas físicas o jurídicas colectivas contra la imposición de sanciones

IV. En cualquier momento, los partidos políticos en contra del incumplimiento del Acuerdo de Participación establecido en el artículo 74bis de este Código. (Fracción adicionada impugnada)

Así, en primer lugar debe destacarse que la porción normativa adicionada busca modificar la naturaleza del propio recurso de apelación, pues su propósito es fungir como recurso judicial efectivo y proteger los derechos político electorales de los ciudadanos y partidos políticos en aquellos momentos fuera del proceso electoral, incluyendo un supuesto en el que se resuelvan **conflictos políticos** derivados de la propia coalición formada para presentar una candidatura común al cargo de Gobernador del Estado.

Esto implica, necesariamente, que para que dichos conflictos surjan, el candidato propuesto por la coalición respectiva ganó la elección a Gobernador del Estado y,

en un segundo momento, no se cumplieron los acuerdos con los partidos políticos involucrados para el nombramiento de los titulares de las dependencias de gobierno.

Es decir, que el recurso de apelación que en su caso procedería consistiría en una especie de escrito de demanda en el que se reclame al Gobernador del Estado o, en su caso, a un partido político en común, el no haber respetado el Acuerdo a que se refiere el artículo 74 bis del Código Electoral.

Ahora, es importante destacar que la naturaleza de una coalición es presentar a un candidato en común para contender por un cargo de elección popular, **sin que eso signifique necesariamente que, al ganar la elección la persona candidata, que dicha coalición continuará.**

Esto, pues dicha naturaleza atiende al propio proceso electoral, al grado que la propia Ley General de Partidos Políticos, en el artículo correspondiente a las coaliciones de partidos, establece que en los convenios en los que se plasme la coalición se deberá precisar, para el caso de los candidatos a cargos de senador o diputado, el partido al que quedarán adscritos al momento de ganar la elección, por lo que una vez elegidos no se les contemplará como una coalición dentro del Congreso, sino individualmente como partidos, como a continuación se observa:

Artículo 87.- (...)

11. Concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones de senadores y diputados, terminará automáticamente la coalición por la que se hayan postulado candidatos, en cuyo caso los candidatos a senadores o diputados de la coalición que resultaren electos quedarán comprendidos en el partido político o grupo parlamentario que se haya señalado en el convenio de coalición.

Si bien dicha distinción no se hace para el caso de los titulares del Poder Ejecutivo por las propias características de dicho poder, esto permite determinar que la razón de las coaliciones termina con el proceso electoral, de tal manera que se entiende que la persona electa para el cargo del Poder Ejecutivo es quien detendrá las facultades que le corresponden y no los partidos políticos cuya plataforma electoral en común lo impulsó en la candidatura pues, incluso, por definición constitucional, el Poder Ejecutivo es unipersonal.

En otras palabras, el propósito de los partidos políticos respecto de los candidatos es impulsar ciudadanos para acceder al ejercicio del poder público, más no implica que dichos ciudadanos respondan a intereses de los partidos que los impulsaron, pues al momento de acceder a un cargo público corresponde que se apeguen al régimen de responsabilidad administrativa de todo servidor público y los principios rectores que la Constitución establece.

Esto es confirmado por el propio artículo 3º de la Ley General de Partidos Políticos:

Artículo 3.

1. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, **como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.**

En ese tenor podemos observar que la fracción adicionada al artículo 407 del Código Electoral resulta contrario al artículo 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución Federal, pues precisamente se establece que los órganos jurisdiccionales en materia electoral resolverán las cuestiones que correspondan a dicha materia, **siendo que los Acuerdos a los que hace referencia el artículo adicionado 74 bis de dicho cuerpo normativo, precisamente, escapa de la materia electoral.**

Esto, pues dichos Acuerdos contienen sustancialmente cuestiones de la administración pública estatal, al tratarse del nombramiento de los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo una vez que el proceso electoral ha terminado y que, por disposición constitucional, al ser el cargo de ejecutivo de carácter unipersonal, estamos frente al ejercicio de las facultades propias de dicho cargo y no frente a la materia que es competencia del Tribunal Electoral.

En ese sentido, para que el Tribunal Electoral del Estado pudiera conocer de alguna controversia electoral una vez terminado el proceso electoral, tendría que estar relacionado necesariamente con un acto de autoridad por parte del organismo electoral o la vulneración de un derecho político- electoral, situación que en el caso de los Acuerdos referidos no se surte, tal como se ha explicado anteriormente.

Esto, pues se reitera que la materia de administración pública no constituye un derecho de los partidos políticos y mucho menos debe atender a los intereses particulares de ningún ciudadano u organización política, sino a los principios contemplados en la Constitución y la ley reglamentaria en materia de responsabilidades administrativas.

Incluso, bajo dicho régimen se aprecia una vulneración al principio de división de poderes, al existir una intromisión no justificada por parte de un tribunal jurisdiccional en el ejercicio propio de las facultades del Poder Ejecutivo, pues la evidente consecuencia del recurso de apelación sería la posible condena del Tribunal Electoral Estatal al Ejecutivo para el cumplimiento forzoso del Acuerdo, vulnerando la autonomía del Poder Ejecutivo de carácter unipersonal.

De esa manera, resulta inconstitucional la reforma impugnada al pretender ampliar la competencia de un Tribunal Electoral y pretender que se pronuncie acerca de cuestiones de naturaleza administrativa y que corresponden al ejercicio de las facultades propias; por lo que sus Señorías deberán declarar la invalidez constitucional de las porciones normativas impugnadas.

TERCERO. - LAS NORMAS IMPUGNADAS VIOLAN EL CARÁCTER UNIPERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, INCLUYENDO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL PROCESO DE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, VIOLANDO LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS.

En el presente concepto de invalidez se demostrará a sus Señorías la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, al modificar el carácter unipersonal de la administración pública e incluyendo a los partidos políticos en el régimen de gobierno aplicable al Estado de México.

En ese sentido, se reitera lo desarrollado respecto de las diferencias entre el régimen de gobierno de coalición y el régimen de los partidos políticos respecto de coaliciones políticas.

De esa manera, como parte del régimen de gobierno mexicano, caracterizado por un Poder Ejecutivo unipersonal, encabezado por el Presidente de la República para el caso de la Federación y por los Gobernadores y Jefe de Gobierno para el caso de los Estados de la República y la Ciudad de México, respectivamente, se contempla una estructura administrativa auxiliar de las funciones del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, conforme al artículo 89, fracción III, de la Constitución, el titular del Poder Ejecutivo Federal podrá nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado y demás empleados de la unión cuyo nombramiento y remoción no esté contemplado de otra forma conforme a la Constitución y las leyes, determinando de esa forma la naturaleza unipersonal de la administración pública en el Estado Mexicano.

Incluso, conforme al propio artículo 80 de la Constitución, el Poder Ejecutivo se deposita en un único individuo, por lo que se entiende que todas las facultades previstas para dicho poder corresponden de manera exclusiva al Presidente de la República, salvo en aquellos en los que otro Poder de la Unión participe en el nombramiento.

Ahora, si bien el capítulo III del Título Tercero de la Constitución corresponde al Poder Ejecutivo de la Unión, es decir al Presidente de la República, el artículo 116 de la CPEUM establece la división de poderes que deberá seguirse en cada uno de los Estados de la República, siendo estos el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Conforme a su fracción I, el Gobernador del Estado corresponde al titular del Poder Ejecutivo del Estado, reuniendo requisitos análogos a aquellos para ser Presidente de la República, remitiendo a la Constitución local correspondiente para su desarrollo.

En ese sentido, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, establece en su artículo 65 lo siguiente:

Artículo 65.- El Poder Ejecutivo del Estado se deposita en un solo individuo que se denomina Gobernador del Estado de México.

De esa manera, resulta evidente que el régimen de gobierno del Estado Mexicano prevé, tanto para el orden federal como para el orden local, un Poder Ejecutivo unipersonal con una estructura administrativa auxiliar de sus funciones a su cargo.

Incluso, cuando exista una colaboración entre poderes para el nombramiento de algún funcionario público, ese Alto Tribunal ha señalado, enfáticamente, que se requiere, necesariamente, previsión expresa en la Constitución Federal para que ello ocurra, confirmando el carácter unipersonal de Ejecutivo, ya sea local o federal.

El criterio de ese Alto Tribunal, es de rubro y texto siguientes:

"DIVISIÓN DE PODERES. EL QUE ESTE PRINCIPIO SEA FLEXIBLE SÓLO SIGNIFICA QUE ENTRE ELLOS EXISTE UNA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS, PERO NO LOS FACULTA PARA ARROGARSE FACULTADES QUE CORRESPONDEN A OTRO PODER, SINO SOLAMENTE AQUELLOS QUE LA PROPIA CONSTITUCIÓN LES ASIGNA. El artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en un solo individuo o corporación. Sin embargo, ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte que la división funcional de atribuciones que establece dicho numeral no opera de manera rígida, sino flexible, ya que el reparto de funciones encomendadas a cada uno de los poderes no constituye una separación absoluta y determinante, sino por el contrario, entre ellos se debe presentar una coordinación o colaboración para lograr un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad política del Estado. Como se advierte, en nuestro país la división funcional de atribuciones no opera de manera tajante y rígida identificada con los órganos que las ejercen, sino que se estructura con la finalidad de establecer un adecuado equilibrio de fuerzas, mediante un régimen de cooperación y coordinación que funcionan como medios de control recíproco, limitando y evitando el abuso en el ejercicio del poder público, garantizando así la unidad del Estado y asegurando el establecimiento y la preservación del estado de

derecho. Por su parte, el artículo 133 de la Constitución Federal consagra el principio de supremacía, que impone su jerarquía normativa a la que deben sujetarse todos los órganos del Estado y todas las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones, por lo que, el hecho de que la división de poderes opere de manera flexible sólo significa que entre ellos existe una colaboración y coordinación en los términos establecidos, pero no los faculta para arrogarse facultades que corresponden a otro poder, sino solamente aquellos que la propia Constitución les asigna. De este modo, para que un órgano ejerza ciertas funciones es necesario que expresamente así lo disponga la Constitución Federal o que la función respectiva resulte estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas por efectos de la propia Constitución, así como que la función se ejerza en los casos expresamente autorizados o indispensables para hacer efectiva la facultad propia."²

Adicionalmente, resulta ilustrativo el criterio sustentado en la jurisprudencia P./J. 92/2007 de ese Alto Tribunal, que es de rubro y texto siguientes:

**"FACULTAD DE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA
DETERMINADOS CARGOS, CONTENIDA EN EL
ARTÍCULO 89, FRACCIÓN II, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS. SU ALCANCE.**

² Registro digital: 166964, Instancia: Pleno, Novena Época, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 78/2009, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta., Tomo XXX, Julio de 2009, página 1540, Tipo: Jurisprudencia.

Conforme al citado precepto constitucional, el Presidente de la República puede: a) nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho; b) remover a los agentes diplomáticos y empleados superiores de Hacienda; y, c) nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes. En cuanto a las dos primeras facultades, se advierte que tiene absoluta libertad para hacer los nombramientos y remociones respectivos, sin que su determinación se sujete al cumplimiento de alguna condición en particular, es decir, queda a su discreción la designación o destitución de los empleados públicos a que aquéllas se refieren; mientras que respecto de la facultad mencionada en último término, se observa que, en principio, el titular del Ejecutivo Federal cuenta con igual margen de maniobra y, excepcionalmente, de contenerse en la Constitución Federal o en la legislación secundaria un modo distinto de proceder en relación con la designación o destitución de este tipo de funcionarios, no podrá actuar con total libertad, sino que tendrá que ajustarse a lo que en cualquiera de los ordenamientos señalados se disponga; sin embargo, ello no significa que la facultad otorgada al legislador para establecer en la ley fórmulas de nombramiento distintas respecto de los demás empleados de la Unión sea ilimitada, pues si bien al efecto se puede prever la colaboración entre poderes, en todo caso debe atenderse al sistema constitucional mexicano -en cuanto establece el principio de división de poderes, así como las

funciones que a cada uno de los poderes les corresponden-, a fin de respetar tal sistema.”³

Entonces, como se puede advertir de las jurisprudencias anteriores, para que sea constitucional la colaboración entre poderes (en el nombramiento de funcionario o servidores públicos de la Administración) es requisito indispensable que exista una norma constitucional expresa que así lo permita.

Ahora, respecto de los Partidos Políticos y sus particularidades, la Ley General de Partidos Políticos establece la definición que le corresponde:

Artículo 3.

1. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y **tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.**

Así, del artículo citado se observa que la definición de Partido Político prevé la creación de una entidad con el fin de promover la participación de la población en la vida democrática, contribuyendo a los órganos de representación política y constituyéndose como una organización de ciudadanos para hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.

En ese sentido, la propia definición de Partido Político prevé fungir como organización social para coadyuvar en que los ciudadanos accedan a los puestos de representación popular y al ejercicio del poder público. Sin embargo, no se prevé de ninguna manera que dichas entidades desplieguen su actividad a través de dichos ciudadanos que ejercen el poder público.

Esto, pues se entiende que los partidos políticos, como entidades con personalidad jurídica y patrimonio propios, deben observar por los propios intereses y objetivos que, al momento de ser constituidos, fueron establecidos por sus fundadores.

³ Registro digital: 170748, Instancia: Pleno, Novena Época, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: P./J. 92/2007, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta., Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 989, Tipo: Jurisprudencia.

De esa manera, la razón de existir de un partido político va encaminada a asegurar sus intereses políticos, al fungir como representación de los intereses de sus propios afiliados. Esto, necesariamente implica una incompatibilidad con el ejercicio del poder público, pues uno de los ejes rectores del ejercicio del poder público es la imparcialidad y la atención del interés de toda la población.

Es por lo anterior que, conforme a la forma de gobierno que rige al Estado Mexicano, la participación de los partidos políticos se limita a fungir como una organización que permita a ciudadanos que comparten sus intereses políticos, llegar a un cargo de servidor público electo popularmente.

Sin embargo, la elección por parte de los ciudadanos corresponde a la persona específicamente determinada y que, si bien es respaldado por una plataforma política, quien detendrá las facultades y responsabilidades del cargo de servidor público será únicamente dicha persona y nunca el partido político que la respalda.

Así, conforme al Decreto impugnado en la presente acción, **se observa una clara incompatibilidad de las disposiciones tanto con la Constitución General como con la Constitución del Estado, al pretender modificar la forma de gobierno que rige en el Estado de México e involucrar a los Partidos Políticos en la formación de dicho gobierno, por pretender que se celebren acuerdos con la persona candidata a gobernador en los que se establezca, de manera previa, la manera en que, los partidos políticos que señalen una candidatura común, se nombrarán a los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado.**

Esto implica un rompimiento directo con la cualidad unipersonal del Ejecutivo estatal, al involucrar a terceros en el esquema de nombramiento de sus dependientes, afectando su autonomía y llevando a los partidos políticos a formar parte del Poder Ejecutivo, sobre todo, si se toma en cuenta que no existe una norma expresa en la Constitución Federal que así lo permita.

Adicionalmente, tal y como se señala en párrafos previos, los partidos políticos, al ser concebidos como organizaciones sociales que representan y defienden determinadas cuestiones ideológicas y políticas, implican necesariamente que el desarrollo de sus derechos, que conforme a las normas impugnadas se traduce en el derecho de participar del nombramiento de los titulares de las dependencias del Ejecutivo, vayan encaminados precisamente a un actuar dirigido a beneficiar sus intereses.

Esto no debe entenderse indebido, pues precisamente el ejercicio de las actividades políticas de los partidos contribuye a la vida democrática del país y asegura que sean escuchados y tomados en cuenta los intereses de toda la población.

Sin embargo, dicha actividad precisamente se encuentra restringida a un ámbito definido que no incluye el ejercicio del Poder Público, pues resultaría necesariamente contrario a la naturaleza de las instituciones del Estado y el principio democrático que rige al Estado mexicano, al crear un gobierno de partidos que, lejos de tomar en cuenta los intereses de la población de manera imparcial, se privilegiarían los intereses de cada uno de los partidos que participen de la formación del gobierno, en detrimento necesario de los intereses comunes de la población en general.

No debe dejar de precisarse que, si bien como ha sido expuesto la Constitución General prevé la posibilidad de un gobierno de coalición como un matiz al sistema presidencialista en México, dicho régimen no implica un sistema en el que se haga partícipes a los partidos políticos en el gobierno formalmente hablando.

Se afirma lo anterior pues, conforme a la fracción XVII del artículo 89 de la CPEUM, el Presidente de la República cuenta con la facultad de, en cualquier momento, formar un gobierno de coalición con los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, a través de un convenio que regule los términos en el que se realice y que deberá ser aprobado por la Cámara de Senadores.

Así, se observa que dicha forma de gobierno implica la participación de dos Poderes de la Unión, siendo estos el Ejecutivo y el Legislativo.

De esa manera, la distinción especial es que dicho gobierno de coalición se forma con los ciudadanos representantes de los partidos políticos en el Congreso de la Unión, por lo que se insiste en que **los partidos políticos no forman parte formal de la conformación del gobierno bajo esa figura, sino que se trata de una colaboración de los miembros de los poderes referidos y que, si bien tienen ideales políticos y agendas correspondientes, se trata de servidores públicos sujetos a los principios y responsabilidades que cualquier servidor público y, en especial, a los principios constitucionales que rigen el servicio público, previstos en el Título IV de la Carta Magna.**

De esa manera es que resulta evidente la inconstitucionalidad del Decreto 91 por el que se reforman la fracción III del artículo 202, la fracción XVIII del artículo 390, el

primer párrafo del artículo 407 y se adiciona el artículo 74 bis, la fracción XIX del artículo 390, la fracción IV del artículo 407 del Código Electoral del Estado de México.

ANEXOS

1. Copias certificadas de las Constancias de mayoría correspondientes a los diputados que suscriben la presente acción de inconstitucionalidad y que acreditan la legitimación para promover la presente demanda.

2. Copia simple de la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de México de 30 de septiembre de 2022 que contiene el Decreto 91 por que se reforma la fracción III del artículo 202, la fracción XVIII del artículo 390, el primer párrafo del artículo 407 y se adiciona el artículo 74 bis, la fracción XIX del artículo 390, la fracción IV del artículo 407 del Código Electoral del Estado de México.

Por lo antes expuesto y fundado, a ustedes **MINISTROS DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**, atentamente pido:

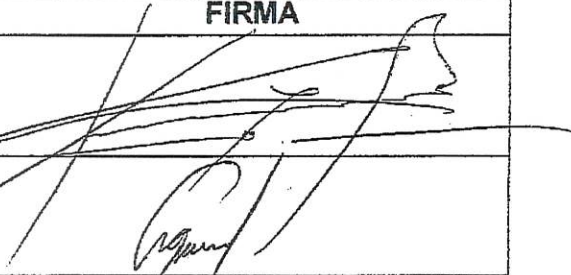
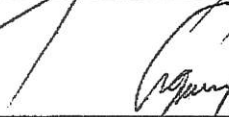

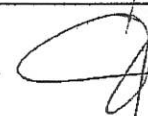
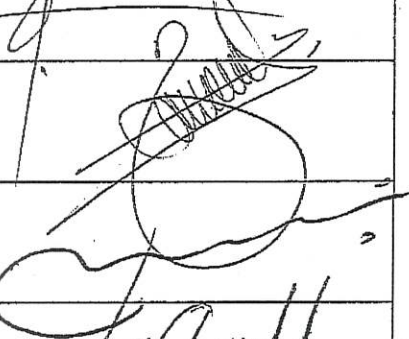
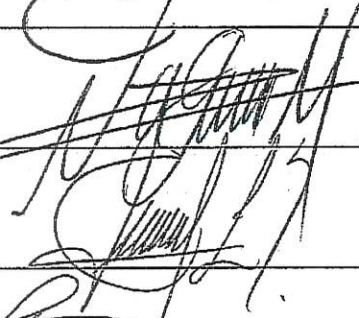





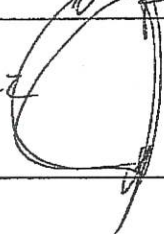
PRIMERO. – Tener por presentada la demanda de acción de inconstitucionalidad que promovemos con el carácter que nos ostentamos.


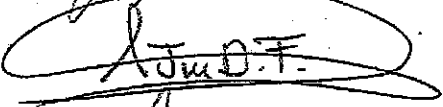
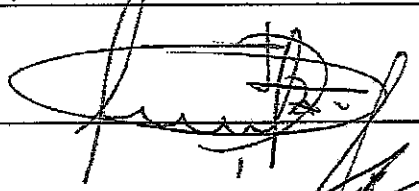
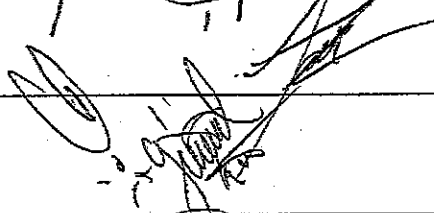
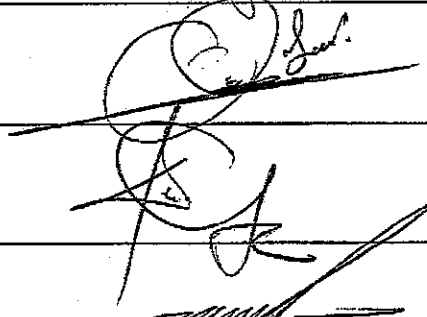



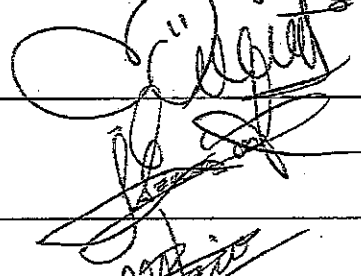
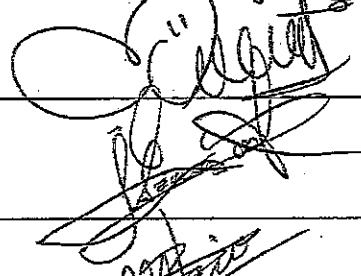
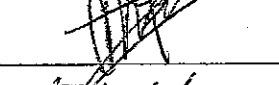


SEGUNDO. – Admitir a trámite la presente demanda de acción de inconstitucionalidad en sus términos.

TERCERO. – Tener por designadas como delegadas y autorizadas a las personas indicadas al inicio de este escrito, así como por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos.

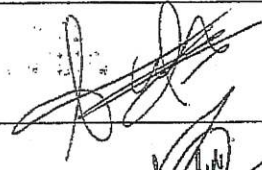
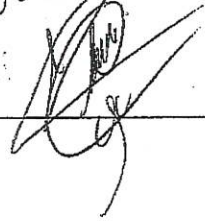
CUARTO. – En el momento procesal oportuno, declarar fundados los conceptos de invalidez y la inconstitucionalidad de las normas impugnadas.

PROTESTAMOS LO NECESARIO:

No.	NOMBRE	FIRMA
1	Maurilio Hernández González	
2	Zanilano Aguirre Cruz	
3	Daniel Andrés Sibaja González	
4	Faustino Del Cruz Pérez	
5	Ysoka Yanez Rojas	
6	Mónica Álvarez Nemer	
7	MARCELO GUTIERREZ	
8	Karina Labastida Sotelo.	
9	Elba Aldana Duarte	
10	Alicia Mineado Moru	
11	Beatriz García Villegas	
12	Max Agustín Correa Hernández	

13	Isaac Martín Montoya Márquez	
14	Lourdes Jezabel Delgado Flores	
15	GERARDO ULLOA PEREZ	
16	CARLO MURILLOZ	
17	Azucena Cisneros Coss	
18	Abraham Sarone' Campos	
19	Valentín González	
20	MARIA DEL ROSARIO EUGIOE VARGAS	
21	Mario Ariel Juarez Rodriguez	
22	Edith Mariol Mercado Torres	
23	Dionilio JORGE GARCIA SANCHEZ	
24	Musa Marie Zelino Gonzalez	
25	Myra Adez Bermudez	

501010

26	ANAYS MIRIAM BURGOS Hdz.	
27	Adrian Manuel Galicia Salceda	
28		
29		
30		

Ciudad de México, a la fecha de su presentación.

018109

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2022 NOV 3 AM 8 37

OFICINA DE CERTIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

Recibido mediante buzón Judicial de fecha
28 de Octubre 2022 en (31) fojas con.

(10) Constancias de Mayoría en copias
certificadas en (2) fojas cada una.

(7) Constancias de Mayoría en copias certificadas
en (1) foja cada una.

(10) constancias de representación proporcional
en copias certificadas en (1) foja cada una.

Impresión de decreto número 91 de fecha

30 de septiembre de 2022 en (8) fojas

(1) traslado.

